



DECLARACIÓN DE LA VI CUMBRE SOCIAL

Madrid, 12 de Febrero de 2013

Desde el pasado 10 de diciembre de 2012, fecha en la que se reunió por última vez la Cumbre social, el deterioro de la situación económica, política y social ha ido en aumento hasta alcanzar niveles insostenibles para la mayoría de la ciudadanía.

Dos elementos expresan mejor que ningún otro la gravedad de la situación por la que atravesamos: las cifras de desempleo con el drama personal y colectivo que éstas esconden, y los nuevos casos de corrupción aireados y que llegan a lo más alto de las instituciones del Estado y del propio partido del Gobierno.

Los datos del paro aparecidos recientemente expresan, sin paliativo que valga, el fracaso de las políticas de austeridad dogmática que se vienen aplicando por los sucesivos gobiernos desde mayo de 2010. Es el fracaso de las dos reformas laborales que se han impuesto, de las políticas de devaluación interna aplicadas, y del deterioro de la actividad económica que están consiguiendo el empobrecimiento generalizado de la mayoría de la sociedad. Por su parte, el rescate del sector financiero, que pagamos todos y todas con nuestros impuestos, está suponiendo una reestructuración del sector, a costa de miles de puestos de trabajo, lo que puede generar una concentración bancaria que traiga aparejada exclusión financiera y la persistencia del bloqueo del crédito, sin el cual tampoco puede animarse la actividad económica.

Los últimos acuerdos adoptados el pasado mes de enero por el Ministerio de Sanidad y servicios sociales en relación a la atención a las personas en situación de dependencia, vienen a desmontar definitivamente el Sistema de protección social público y universal en los términos recogidos en la Ley estatal 39/2006. Se implanta un modelo mercantilizado que discriminará el acceso y disfrute de los servicios en función del poder adquisitivo de las personas y sus familias. La reducción de la intensidad de cobertura de los servicios, la minoración de las prestaciones económicas de cuidado familiar, el incremento generalizado del copago hasta el 90%, la moratoria para reducir el número de beneficiarios, son la consumación de una Reforma legislativa que ampara el recorte del gasto social público y transfiere a las personas la responsabilidad de financiar el gasto que el gobierno recorta. Se debilita igualmente la responsabilidad y tutela públicas, al renunciar al acceso a la Red mediante oferta pública, potenciando las ayudas económicas para comprar los servicios, a un precio mucho más elevado que la prestación que se concede.

Todo es consecuencia de políticas equivocadas y de la adopción de medidas de gran trascendencia para el bienestar de la mayoría social, de forma poco transparente y en algunos casos dudosamente constitucionales, que están sembrando el malestar de la ciudadanía en general y de los y las profesionales en particular. Nadie en tan corto espacio de tiempo ha conseguido concitar en contra tantas y tan dispares voces desde la sanidad, la educación, los servicios sociales, la justicia...

No valen excusas ni frívolas alusiones a los "brotos verdes". La situación es socialmente insoportable y únicamente puede enfrentarse con alguna posibilidad de éxito si se cambia radicalmente la política económica orientándola a la creación de empleo y si se reconstruyen las redes de protección para atender a las personas y las familias que, de forma más severa, sufren los efectos de la crisis y de las políticas que se están aplicando.

El incremento de la pobreza, con una especial incidencia en los riesgos de pobreza entre la población infantil, y la exclusión social no es admisible en sociedades desarrolladas, con potencialidades y recursos suficientes para garantizar el bienestar de todas las personas; además, suponen un riesgo cierto de fractura social de imprevisibles consecuencias.

Sí han sido motivo de escándalo público los sueldos y pensiones multimillonarias que se han llevado altos ejecutivos de empresas, cajas y bancos, muchos de ellos responsables de la situación por la que atravesamos, mientras se bajan los salarios, las pensiones y muchas familias no llegan a fin de mes y son desahuciadas de sus viviendas. Igualmente, la adopción de decisiones con total falta de transparencia y ocultismo y los casos de corrupción política y económica, el fraude fiscal y la fuga de capitales a paraísos fiscales que la amnistía fiscal ha convalidado, etc, que se han ido generando y que ahora presuntamente alcanzan a la cúpula del partido que ganó las elecciones generales y al mismo gobierno, no hacen otra cosa que socavar, aún más, la confianza en las instituciones políticas de amplios sectores de la ciudadanía, lo que puede acabar amenazando seriamente la convivencia democrática.

La Cumbre social valora el esfuerzo realizado en la recogida de firmas para la tramitación de ILP sobre los desahucios, que junto a las movilizaciones que se han venido realizando ha obligado al PP a admitir su tramitación parlamentaria, aunque denunciemos la pérdida de tres nuevas vidas de personas amenazadas por un desahucio. La Cumbre Social apoya y llama a participar en la manifestación convocada por la Plataforma para el próximo día 16 de febrero.

Por otro lado, la Cumbre Social muestra su apoyo a las movilizaciones convocadas por la Marea Blanca el próximo día 17 de febrero como rechazo a la política de privatización, desmantelamiento y recorte de la Sanidad Pública, así como a las reivindicaciones que han llevado a la huelga de jueces/zas y fiscales/as que diferentes asociaciones han convocado para el 20 de febrero contra las reformas emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Manifiesta, igualmente, su apoyo a las movilizaciones previstas en relación a la defensa de la Enseñanza Pública.

La Cumbre Social participa de buena parte de los motivos que animan a las movilizaciones previstas el próximo día de 23 de febrero y en especial de la exigencia de luchar contra la corrupción y por la regeneración de la democracia.

Seguimos insistiendo, en la necesidad de celebrar un referéndum sobre las políticas de este Gobierno. El progresivo agotamiento del sistema que nace en 1978 nos plantea la necesidad de abordar, desde la radicalidad democrática, la profundización de las bases de la democracia participativa, propiciando un ambicioso proceso de regeneración del entramado político institucional; un proceso que solo será posible si es protagonizado por la ciudadanía. En este sentido la Cumbre Social muestra su preocupación por la desafección de los y las jóvenes y muestra su compromiso para llegar con sus propuestas a los centros educativos.

En este sentido, es necesario fortalecer la democracia, a través de una reforma constitucional, para promover mayores niveles de autogobierno, solidaridad y cohesión social y territorial; de reforzar los instrumentos democráticos de participación ciudadana que se han ido deteriorando; de modificar la legislación electoral, para incorporar mayor proporcionalidad y favorecer una vinculación más directa con el electorado, de la Ley de Partidos y su financiación y promover una verdadera Ley de Transparencia.

Paro y corrupción son dos caras de la misma moneda. Como lo son bienestar y democracia.

El principal problema que tiene nuestro país es el desempleo. Nada ni nadie debe despistarnos. Los seis millones de personas en paro, los dos millones de personas que no reciben prestación alguna, y el 1,8 millones de hogares con todos sus miembros sin empleo, dibujan una sociedad desvertebrada y con serios riesgos de exclusión social. Ponemos especial énfasis en el desempleo femenino teniendo en cuenta los últimos datos publicados, que reflejan una destrucción masiva del empleo de las mujeres. Una tasa de paro y una progresiva devaluación de salarios y pensiones, que resta ingentes recursos para el mantenimiento del Estado social y los servicios públicos y que también se está manifestando en la creciente emigración de jóvenes que a pesar de su preparación se ven obligados a abandonar el país por la falta de empleo.

Por eso, urge un cambio de rumbo de la política económica capaz de hacer compatible el equilibrio de las cuentas públicas y el impulso del desarrollo económico y la creación de empleo. No se puede seguir así. Si el Gobierno sigue obsesionado con la política antidéficit y la reducción del gasto social, si no es capaz de activar con decisión y coraje medidas contundentes contra la corrupción y de impulsar una reforma constitucional para renovar la democracia, el conflicto social continuará más abierto que nunca y la Cumbre Social muestra su disposición a convocar nuevas y masivas movilizaciones contra las políticas de ajuste y en defensa de una respuesta contundente a la corrupción política y económica.

La Cumbre Social se suma a la convocatoria realizada por la Confederación Europea de Sindicatos para realizar manifestaciones el próximo día 10 de marzo contra los recortes de las políticas económicas y sociales que se está practicando en la Unión Europea y convocará una nueva reunión de la Cumbre para concretar el apoyo y participación en esta convocatoria europea.